

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO VIRTUAL

La Secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en acatamiento a lo consagrado en el ordinal 3 del artículo 20, Ley 712 de 2001, notifica a las partes la sentencia de fecha (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

HACE SABER:

Radicado: 05088-31-03-001-2021-00002-01
Proceso: Especial de Fuero Sindical
Demandante: ARIEL ALEXANDER DÍAZ ARDILA
Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
INPEC
INTERVINIENTE SINDICATO DE TRABAJADORES PENITENCIARIOS Y
CARCELARIO "STPC" NACIONAL
M. P. MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Fecha de fallo: 25 marzo 2021
Decisión: Revoca decisión condenatoria

El presente edicto se publica en la página web de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125> por el término de tres (03) días hábiles, a partir del cinco (05) de abril de dos mil veintiuno (2021).), hasta el siete (07) de Abril de dos mil veintiuno (2021), a las cinco de la tarde (5:00 P.M).

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

IL

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez

Proceso	: FUERO SINDICAL
Demandante	: ARIEL ALEXANDER DÍAZ ARDILA
Demandado	: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-
Radicado	: 05088-31-05-001-2021-00002-01
Interviniente	: SINDICATO DE TRABAJADORES PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS “STPC” NACIONAL
Instancia	: Segunda
Temas y Subtemas	: Laboral Colectivo –Fuero sindical, acción de reinstalación-.
Decisión	: Revoca decisión condenatoria

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRERZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, en el proceso especial de Fuero Sindical - acción de reinstalación-, que en Apelación se conoce.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita declarar que el traslado del demandante del complejo carcelario y penitenciario el “Pedregal”, a la penitenciaría de mediana seguridad de Barranquilla, dispuesto en la Resolución 004067 del 9 de septiembre de 2020, **ocurrió sin el previo permiso del Juez Laboral y para desmejorar sus condiciones laborales y en consecuencia se ordene su reinstalación** al primer centro carcelario y se advierta que previo a cualquier decisión de traslado, debe iniciarse el trámite del levantamiento del fuero sindical.

Hechos Relevantes de la Demanda:

Afirma el apoderado de la parte demandante, que el señor Ariel Alexander Díaz Ardila es miembro del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, en el cargo de Capitán de Prisiones, Código 4278, grado 18; prestando sus servicios en el COPED “Pedregal”, ubicado en Medellín y desde el 27 de octubre de 2017 fue elegido como Vicepresidente en la Junta Directiva Seccional del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios Carcelarios STPC Nacional, de lo que se notificó a la entidad demandada, por lo que conoce sobre su calidad de aforado.

Indica que a través de la Resolución 004067, el establecimiento público desmejoró sus condiciones laborales, porque lo trasladó a otra ciudad, sin el previo procedimiento del levantamiento del fuero sindical; a la ciudad donde fue enviado no recibiría la prima de seguridad, aunado a que es en Medellín donde se encuentra adelantando estudios de maestría y es tratado por su patología de hipertensión; formulándose los recursos de Ley en contra ese acto administrativo interpuso, pero no le fueron resueltos; así que optó por elevar reclamación administrativa, la cual fue contestada a través del oficio 85107-SUTAH-GATAL, indicándole que por el cargo ocupado, de Capitán de prisiones, no es beneficiario de la prerrogativa referida, entendiendo que su nivel es de directivo, cuando la Resolución 2144 lo ubica en el asistencial. Agrega que este hecho ya había ocurrido antes cuando ocupaba el cargo de teniente de prisiones, evento en el que se intentó su traslado de Medellín a Cali,

pero por intermedio de una acción superior, logró contrarrestar esa posibilidad, fallo en el que se dejó claro el nivel asistencial de su empleo.

Asegura que su calidad de aforado la ha reconocido el INPEC, a través de dos acciones: 1) le ha otorgado permisos sindicales, y 2) no se ha trasladado a otros compañeros del nivel asistencial, en razón del fuero; que ante la negativa del convocado a juicio de iniciar el levantamiento del fuero en esta ocasión, presentó tutela conocida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bello (Ant), en esa providencia del 24 de noviembre de la anualidad pasada, se ampararon transitoriamente sus derechos al debido proceso y asociación, mientras accedía a esta jurisdicción.

Advierte que el actuar del INPEC desconoce el acuerdo suscrito con las organizaciones colectivas el 13 de noviembre de 2020, según el cual cuando se traslade a un funcionario que se encuentra amparado con la garantía del fuero sindical, se creará una mesa de diálogo y conciliación con los miembros de la junta de traslado, la Dirección General y la organización sindical afectada con el fin de prevenir desgastes en la administración de justicia.

Respuesta de la parte demandada:

EI INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- aceptó como ciertos los hechos relativo al cargo ocupado por el actor, su condición de directivo sindical y los permisos sindicales otorgados; la orden de traslado de Medellín a Barranquilla, su cuestionamiento a través de los recursos de Ley y la presentación de las diversas Tutelas relacionadas. Asevera que el demandante es un funcionario del INPEC en el grado de Oficial del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional y tiene funciones de mando, dirección y administración, por lo cual carece de la garantía de fuero sindical.

Se opuso a las pretensiones de la demanda y para su defensa formuló las excepciones de mérito que denominó inexistencia de la obligación de levantar fuero sindical para realizar el traslado de un oficial del cuerpo de custodia y vigilancia y legalidad del acto administrativo que ordena el traslado del funcionario.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios Carcelarios STPC Nacional, fue notificado, sin efectuar pronunciamiento alguna frente a la demanda¹.

Decisión de Primera Instancia:

Mediante Sentencia, el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, declaró que el demandante goza de la garantía foral, ordenando al INPEC que previo a trasladarlo de ciudad, solicite al Juez Laboral la calificación de la justa causa para ello, con el levantamiento del fuero sindical. Declaró implícitamente resueltas las excepciones formuladas y condenó en Costas a cargo de la entidad demandada, fijando las agencias en derecho en la suma de \$910.000,00 en favor de la parte demandante.

Para fundamentar la decisión anterior², analizó los artículos 116 y 122 de la Constitución Política, 188 a 190 de la Ley 136; 8, 10, 76 y 118 del Decreto 407 de 1994; 3° del Decreto Ley 770 de 2005 y la Resolución 4124 de 2019, concluyendo que el cargo desempeñado por el demandante no pertenece al nivel directivo, sino al nivel asistencial, lo que no permite ubicarlo en la excepción del párrafo 1° del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo y que al ser el demandante Vicepresidente del sindicato en la Seccional Medellín, previo a la orden de su traslado o cambio de ciudad, debió haberse solicitado la autorización de que trata el artículo 405 ibidem.

¹ Archivos 2 y 2.7

² Archivo 5.

Recurso de Apelación:

Inconforme con la decisión anterior, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, formuló recurso de Apelación³, solicitando se revoque la Sentencia de Primera Instancia, toda vez que vulnera el Parágrafo del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto el demandante esta adscrito al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, quien se encuentra dentro de la categoría de oficiales en el grado de Capitán y es claro que para el ejercicio de sus funciones tiene capacidad de mando, dirección o administración del personal uniformado que se encuentra a su cargo.

Sostiene que sobre el tema se ha pronunciado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dentro del proceso 11001-03-06-000-2008-00025-00, emitió concepto el 5 de junio de 2008, en el que determinó que los oficiales del cuerpo de custodia y vigilancia del establecimiento público tienen funciones de mando, dirección y administración dentro de su correspondiente ámbito, lo cual significa que carecen de la garantía del fuero sindical, de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo y como el demandante desempeña dicho cargo, debió aplicarse el citado parágrafo. Sostiene que no se valoró adecuadamente el material probatorio, pues no se apreció correctamente los diferentes actos administrativos de nombramiento aportados, con los que se demostró que el actor cumple funciones de mando, dirección y administración.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

³ Archivo 7.

CONSIDERACIONES

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 y los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más, en la Primera Instancia.

Conflicto jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir, radica en determinar si hay lugar a revocar la Sentencia de Primera Instancia, analizándose si el demandante es beneficiario del Fuero Sindical o si está dentro de la excepción consagrada en el párrafo 1º del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral, procedente revocar la decisión de Primera Instancia; por las siguientes razones:

Previo a resolver de fondo, debe indicarse que en el trámite de la Primera Instancia y luego de formulado el recurso de Apelación, el apoderado del INPEC solicitó la nulidad de la Sentencia porque no fue proferida en oralidad, debiéndose precisar que tal como lo resolvió el *a quo*, no era la oportunidad procesal para solicitarla conforme lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso al establecer que “*En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación*”; de igual forma es de anotarse, que el proceso de Fuero Sindical es un proceso que se encuentra regulado en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dentro de los procedimientos especiales, sin que conforme a la normatividad que lo regula, esto es, los artículos 112 a 118b *ibidem*, se contemple la exigencia de proferirse Sentencia en oralidad (Como si se hizo con el proceso ejecutivo, en donde algunos trámites específicos tuvo esta exigencia), máxime que no

se están vulnerando derechos fundamentales como el de defensa y debido proceso de las partes; por lo que la situación presentada no genera nulidad alguna; sin que nada impide que se resuelva el recurso de Apelación formulado.

Precisado lo anterior y con la finalidad de resolver lo que corresponde a esta Segunda Instancia, es importante resaltar que se encuentran por fuera de discusión, los siguientes presupuestos fácticos: i) Ariel Alexander Díaz Ardila, ha prestado sus servicios para el cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC desde el 12 de enero de 1994, en diferentes cargos, iniciando como guardián de prisiones código 5175 grado 02; en ocasiones ha sido encargado como comandante de vigilancia, **siendo titular del cargo de que es titular es el de Capitán de prisiones** código 4078 grado 18, en el grado de Teniente, último que ha ejercido al menos durante 2020 y 2021 (archivos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6). ii) El demandante fue designado como vicepresidente del Sindicato de Trabajadora Penitenciarios y Carcelarios –STPC-seccional Medellín, el 27 de octubre de 2017, lo que fue notificado al INPEC (pág. 26 y 27 archivo 1.1); iii) El Inpec, a través de la Resolución 004067 del 9 de septiembre de 2020, dispuso por necesidad del servicio, el traslado del actor del centro carcelario Pedregal, ubicado en Medellín, al centro penitenciario de Barranquilla, como miembro del cuerpo de custodia y vigilancia de la entidad (pág. 34 del archivo 1.1); iv) Contra esa determinación se interpusieron los recursos de Ley, sin éxito alguno, pese a que el actor alegó su calidad de aforado, porque en sentir de la pasiva, el cargo que ocupa es dirección y administración.

El artículo 39 de la Constitución Política de 1991, establece el derecho de asociación sindical reconociendo a los representantes sindicales la garantía del fuero sindical y demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión y en lo relativo a la acción de reinstalación o de restitución está dirigida a amparar a los trabajadores que gozan de fuero sindical, impidiendo que éstos sean desmejorados en sus condiciones de trabajo, o trasladados a otros establecimientos de la misma empresa, sin justa causa y previa autorización judicial.

En lo que interesa al recurso de Apelación, encuentra esta Magistratura que el Parágrafo Primero del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo establece que **“Gozan de la garantía del fuero sindical, en los términos de este artículo, los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración.”** (Negrillas fuera del texto).

Sobre la norma anterior, se ha pronunciado la **Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dentro del proceso 11001-03-06-000-2008-00025-00 (1892), del 5 de junio de 2008**, señalando que los oficiales del cuerpo de custodia y vigilancia del establecimiento público Inpec **“tienen funciones de mando, dirección y administración dentro de su correspondiente ámbito de competencia, en relación con los servicios de orden, seguridad y disciplina al interior de los establecimientos de reclusión, lo cual significa que carecen de la garantía del fuero sindical, de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 12 de la ley 584 de 2000. ...”**. (Negrillas fuera de texto).

Para lo anterior, se fundamentó en el **Decreto Ley 407 de 1994, relativo al régimen de personal del INPEC**, el cual establece en los artículos **126** la composición del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y en el **127** las categorías y grados de sus funcionarios, para varios efectos, entre los cuales está el ejercicio del mando; veamos:

“Artículo 126.- Composición.- El Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución”.

“Artículo 127.- Categorías y grados.- Para efectos de mando, régimen disciplinario, obligaciones y derechos consagrados en este decreto, las categorías de Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y Auxiliares de Guardia comprenden los siguientes grados:

a) Categoría de Oficiales.

1. Comandante Superior.
2. Mayor.
3. **Capitán.**
4. **Teniente**

b) Categoría de Suboficiales:

1. Inspector Jefe.
2. Inspector.

3. Subinspector;

c) Categoría de Dragoneantes:

1. Dragoneantes.

2. Distinguidos;

d) Categoría de alumnos y auxiliares de guardia:

1. Alumnos aspirantes a Dragoneantes.

2. Servicio militar de bachilleres". ..."

Sobre esta última norma, explicó la Alta Corporación en la citada providencia⁴, que **"Los Oficiales son los egresados de la Escuela Penitenciaria Nacional, formados y capacitados para comandar la vigilancia penitenciaria y carcelaria, dirigir, coordinar y responder por los servicios de orden, seguridad y disciplina en los establecimientos penitenciarios y carcelarios y garantizar el normal desarrollo de las actividades en las dependencias del INPEC, conforme lo dispone el artículo 128 del mismo decreto ley. Son de tres clases, de acuerdo con el artículo 129: 1) Oficiales de seguridad; 2) Oficiales logísticos y 3) Oficiales para tratamiento penitenciario."** (Negrillas fuera del texto).

Con relación con los Oficiales de Seguridad, entre los cuales está el demandante, el artículo 130 del citado Decreto Ley 407 de 1994, establece sus funciones, en la siguiente forma:

"Oficiales de Seguridad.- Son Oficiales de Seguridad los egresados de la Escuela Nacional Penitenciaria, encargados de la vigilancia y seguridad de los establecimientos penitenciarios y carcelarios nacionales **que tienen como misión dirigir, coordinar y responder por los servicios de orden, seguridad y disciplina en los establecimientos de reclusión y de garantizar el normal desarrollo de sus actividades, ejerciendo con eficiencia y eficacia el mando sobre el personal bajo sus órdenes"** (Negrillas fuera del texto).

Ahora bien, el artículo 76 ibidem, establece que el personal de carrera del INPEC, se clasifica en dos grupos: a) Personal administrativo y b) Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional. Estos últimos, (artículo 113) cumplen con un servicio esencial del Estado; son un personal uniformado, **jerarquizado**, con régimen y disciplina especiales, **cuya misión es mantener y garantizar el orden, la seguridad, la disciplina y los programas de**

⁴ Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dentro del proceso 11001-03-06-000-2008-00025-00 (1892) del 5 de junio de 2008.

resocialización en los centros de reclusión, la custodia y vigilancia de los internos, la protección de sus derechos fundamentales y otras garantías consagradas en la Constitución Política, en pactos, tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia y en general asegurar el normal desarrollo de las actividades en los centros de reclusión.

Y según el artículo **118** de la citada normatividad, los deberes de todos los trabajadores de ese cuerpo de custodia, dentro del cual está el demandante, son:

- Velar por la seguridad, vigilancia y disciplina de los establecimientos penitenciarios y carcelarios;
- Cumplir las órdenes impartidas por las autoridades competentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC;
- Servir como auxiliares en las labores de trabajo y educación de los internos, y en general, en su resocialización;
- Cumplir las funciones de seguridad y policía judicial en los términos señalados por la ley;
- Cumplir las órdenes y requerimientos de las autoridades judiciales, con respecto a los internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios;
- Observar una conducta seria y digna;
- Cooperar con la Dirección en todo lo que tienda a la resocialización de los reclusos, suministrando los informes que estime conveniente para esta finalidad;
- Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud, conservando en todo caso a la vigilancia visual;
- Requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados, sus celdas y sitios de trabajo conforme al reglamento;
- Custodiar a los condenados o detenidos que vayan a trabajar fuera del establecimiento y emplear todas las precauciones posibles para impedir violencias, evasiones y conversaciones o relaciones de ellos con los extraños, exceptuando los casos previstos en el Código Penitenciario y Carcelario y en el Reglamento General;
- Realizar los ejercicios colectivos que mejoren o mantengan su capacidad física; participar en los entrenamientos que se programen para la defensa, orden y seguridad de los centros de reclusión; tomar parte en las ceremonias internas o públicas para realce de la institución; asistir a las conferencias y clases que eleven su preparación general o la específica penitenciaria;
- Mantener la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario;
- Ejecutar las demás funciones relacionadas con el cargo, asignadas por la ley o reglamento;

- Entregar el uniforme, insignias y demás elementos a su cargo al almacén general del establecimiento carcelario respectivo, una vez retirado del servicio o cuando sea suspendido de sus funciones y atribuciones legalmente, respondiendo por aquellos que falten para podersele expedir el respectivo paz y salvo;
- Garantizar la prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades en las dependencias del Instituto; y
- Velar por el estricto cumplimiento del Régimen Penitenciario y Carcelario, Reglamento General e Interno, Planes de Seguridad y de defensa y en general de todas aquellas disposiciones que garanticen los objetivos de la justicia, y la misión y los objetivos penitenciarios y carcelarios.

Por su parte el **Manual de Funciones asignado al aquí demandante, contenido en la Resolución 4124 de 2019⁵**, establece como propósito principal **del cargo de Capitán de Prisiones, Código 4278, Grado 18, estructurar y orientar los servicios de orden, seguridad y disciplina** en los establecimientos de reclusión y garantizar el normal desarrollo de sus actividades, en el marco de la normatividad vigente, las políticas institucionales y los derechos humanos. Incluyéndose en el acápite “descripción de las funciones esenciales”, las siguientes:

“1. Estructurar y orientar los servicios de orden, seguridad y disciplina de los ERON, de conformidad con la normatividad vigente, las políticas institucionales y los derechos humanos.

2. Implementar los planes y programas en materia de seguridad atención y tratamiento acorde a la normatividad vigente y lineamientos institucionales.

3. Implementar los planes, programas, proyectos y procedimientos de administración, organización y seguridad penitenciaria y carcelaria, conforme a la normatividad aplicable.

4. Proyectar y proponer los planes de defensa, estudios de seguridad, programas de orden logístico y táctico, que garanticen la prestación del servicio de custodia y vigilancia en los establecimientos de reclusión, direcciones regionales o escuela de Formación.

5. Realizar los estudios y requerimientos de necesidades y condiciones de instalaciones, equipos, bienes, material de intendencia personal y demás elementos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.

6. Planear y orientar los operativos, requisas, esquemas de seguridad, monitoreo, traslado de PPL, de manera permanente garantizando la correcta ejecución de los procedimientos vigentes.

7. Asignar y controlar los servicios de seguridad que permitan el desarrollo de las actividades, planes, programas y/o proyectos de atención básica y tratamiento penitenciario de los PPL, conforme a los cronogramas, lineamientos institucionales y la normatividad aplicable.

⁵ Página 314 del archivo digital 4.3.

8. Socializar y orientar al personal del cuerpo de custodia y vigilancia en la ejecución de los planes, programas, proyectos y procedimientos del proceso de seguridad, solución de conflictos y demás requeridos para el correcto funcionamiento, de conformidad con los lineamientos institucionales y normatividad aplicable.

9. Organizar las actividades que demanden los servicios de seguridad, garantizando las metas de seguridad penitenciaria, acorde a los reglamentos y procedimientos.

10. **Elaborar y orientar los operativos y esquemas de seguridad, requisas, ingreso de salida del establecimiento de reclusión, monitoreo electrónico, conducción y traslados de las personas privadas de la libertad a cargo del instituto, garantizando la correcta ejecución de los procesos y procedimientos vigentes.**

11. Atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, relacionadas con asuntos de su competencia, teniendo en cuenta los estándares y directrices de gestión documental, así como los insumos o documentos requeridos, para las respuestas de las órdenes de las autoridades judiciales y entes de control.

12. Mantener actualizada la información en los sistemas, aplicativos u otros medios tecnológicos, de su competencia, de acuerdo con los estándares de seguridad y privacidad de la información.

13. Asistir u las reuniones de los consejos, juntas, comités, y demás cuerpos, según las instrucciones impartidas por el jefe inmediato.

14. Promover la estructuración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectos y políticas propias de su dependencia.

15. Propender por el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión integrado, sistema de gestión de la calidad, y modelo estándar de control interno, — MECI de la entidad, asegurando el cumplimiento y aplicación permanente.

16. Las demás funciones, que le sean asignadas por la ley o reglamento, y que corresponda a la naturaleza de la dependencia.” (Negrillas fuera del texto).

De la lectura detallada de las anteriores funciones, unido a lo precisado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dentro del proceso 11001-03-06-000-2008-00025-00 (1892), del 5 de junio de 2008, se concluye sin lugar a dudas que los Oficiales del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, dentro del cual está el señor Ariel Alexander Díaz Ardila, en su calidad de Capitán de Prisiones, Código 4278, grado 18, tienen funciones de mando, dirección y administración dentro de su correspondiente ámbito de competencia, con relación con los servicios de orden, seguridad y disciplina al interior de los establecimientos de reclusión, lo cual significa que están excluidos de la garantía del Fuero Sindical, de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el

artículo 12 de la Ley 584 de 2000.

Así las cosas, de acuerdo a lo expuesto en precedencia, esta Sala de Decisión Laboral revocará la decisión de Primera Instancia, en cuanto declaró que el señor Ariel Alexander Diaz Ardila goza de la garantía del Fuero Sindical y que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- debe solicitar la calificación judicial previa al Juez Laboral⁶, de la justa causa para trasladarlo del complejo carcelario y penitenciario el “Pedregal” en la ciudad de Medellín (Ant.), para en su lugar absolver a la entidad demandada de todas las pretensiones de la demanda.

Corolario de lo expuesto, esta Sala de Decisión revocará en todas sus partes la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que en Apelación se revisa.

COSTAS:

Se revocará la condena en Costas de Primera Instancia impuestas a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, **en su lugar se condenará a estas a cargo del demandante Ariel Alexander Díaz Ardila**, al haber sido vencido en el presente proceso y en favor de la entidad demandada. Lo anterior anotándose que las agencias en derecho serán liquidadas por el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura; con sujeción a las reglas que se indican en dichas normas.

⁶ Es de anotarse que por convención se tiene establecido un procedimiento especial según acuerdo suscrito con las organizaciones colectivas el 13 de noviembre de 2020, de acuerdo al cual cuando se traslade a un funcionario que se encuentra amparado con la garantía del fuero sindical, se creará una mesa de diálogo y conciliación con los miembros de la junta de traslado, la Dirección General y la organización sindical afectada con el fin de prevenir desgastes en la administración de justicia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **REVOCA** la Sentencia de Primera Instancia de de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de **Apelación** se revisa, **en el proceso especial de FUERO SINDICAL -acción de reinstalación-** en cuanto declaró que el señor **ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA** goza de la garantía del fuero sindical y que el **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-** debe solicitar la calificación judicial previa al Juez Laboral, de la justa causa para trasladarlo del complejo carcelario y penitenciario el “Pedregal” en la ciudad de Medellín (Ant.), **para en su lugar ABSOLVER a la entidad demandada de todas las pretensiones de la demanda;** de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Se **REVOCA** la condena en Costas de Primera Instancia impuestas a la parte demandada; **en su lugar se CONDENA a estas a cargo del demandante Ariel Alexander Díaz Ardila y en favor del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-;** anotándose que las agencias en derecho serán liquidadas por el Juzgado de Primera Instancia. **No se CONDENA en Costas en esta Segunda Instancia;** según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto **se notifica por EDICTO** y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. Se declara cerrada la audiencia y en constancia se firma por quienes en ella intervinieron, luego de leída y aprobada,

Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

Con salvamento de voto

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
Estados No **054** del **5 de abril de 2021**

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>